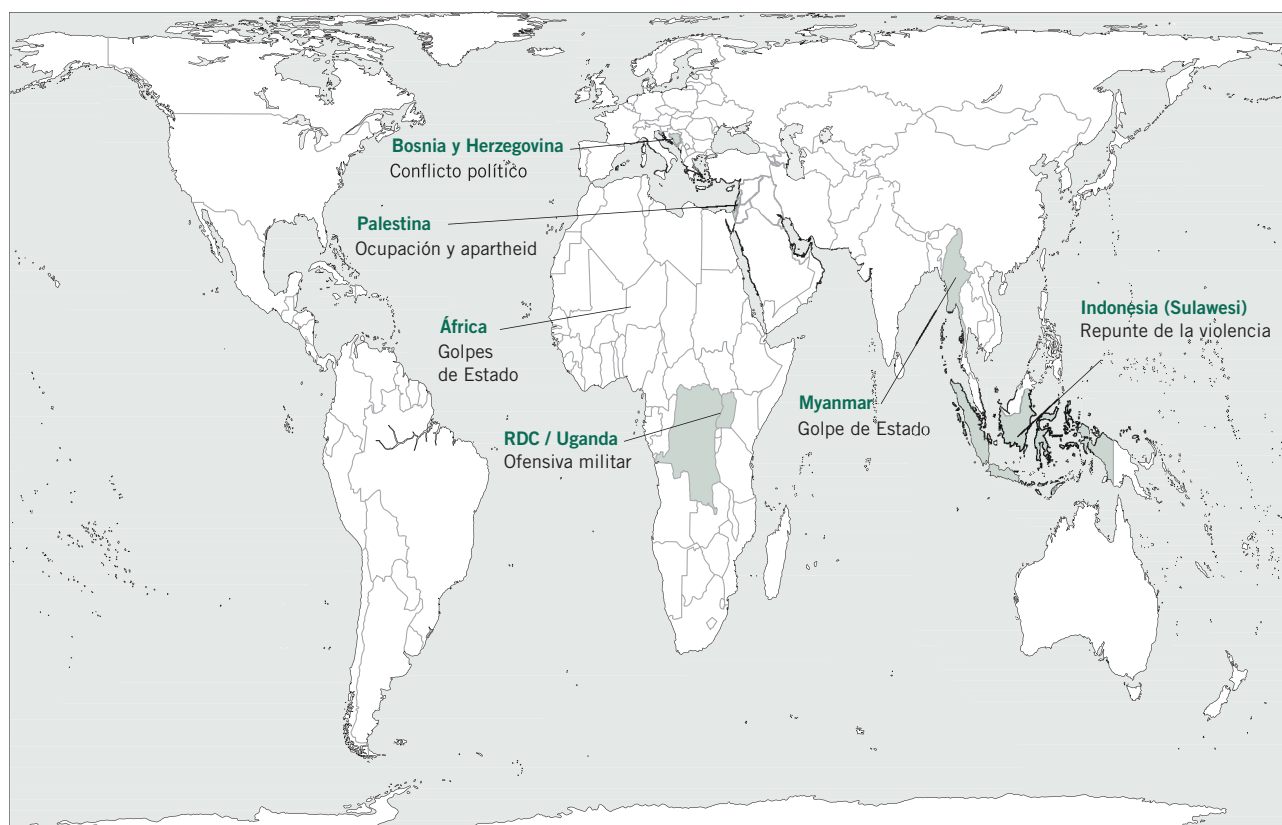


5. Escenarios de riesgo para 2022

A partir del análisis del año 2021 de los escenarios de conflicto armado y tensión a nivel mundial, la Escola de Cultura de Pau de la UAB identifica en este capítulo seis contextos que por sus condiciones y dinámicas pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante 2022 o incluso a más largo plazo. Los escenarios de alerta de cara al año 2022 hacen referencia a los retos y riesgos de la proliferación de golpes de Estado en África, después de que el continente fuera escenario de cuatro alzamientos militares en 2021 en Chad, Malí, Guinea y Sudán; a la intervención de Uganda en territorio congolés en persecución del grupo armado ADF, que puede alimentar una escalada del conflicto con graves efectos desestabilizadores; al agravamiento de la situación en Myanmar, dado el aumento de la violencia y el deterioro de la situación humanitaria y económica en el país tras el golpe de Estado y en el contexto de pandemia; al repunte de los ataques perpetrados por el grupo armado MIT en la provincia de Sulawesi Central; a la intensificación de la crisis política en Bosnia y Herzegovina y a la grave situación de violencia, apartheid y desposesión en Palestina y los riesgos de continuar ignorando esta realidad.

Mapa 5.1. Escenarios de riesgo para 2022



5.1 Retos y riesgos de la proliferación de golpes de Estado en África

2021 ha sido un año de retrocesos en materia de gobernanza democrática para el continente africano, padeciendo cuatro golpes de Estado efectivos por parte de aparatos militares en Chad (abril), Malí (mayo), Guinea (septiembre) y Sudán (octubre), además de otro intento que fracasó en marzo en Níger –y al cierre de este informe se ha producido otro golpe efectivo en Burkina Faso el 23 de enero de 2022. Desde 1999 no se registraba un año con estas cifras en el continente. Si incorporamos a los golpes padecidos en 2021, los golpes registrados desde 2013 en el continente, que incluye a países como Túnez, Argelia, Burundi, Egipto, RCA, Burkina Faso o Zimbabwe, ello significa que alrededor del 20% de los países africanos han vivido cambios inconstitucionales de gobierno en menos de una década.

La declaración de Lomé del año 2000, con la cual la entonces Organización para la Unidad Africana (OUA) reaccionó para prohibir los cambios inconstitucionales de gobierno en el continente, acordando el no reconocimiento de los gobiernos golpistas y su expulsión del organismo, ha servido durante un tiempo para contener este tipo de prácticas por los aparatos militares. En la década anterior a Lomé, se registraron 15 golpes de Estado (1991-2000), frente a los ocho producidos en la década posterior (2011-2020). Sin embargo, el resurgimiento del intervencionismo de los militares en la política africana en el último año, principalmente en la región occidental, pone en riesgo los importantes avances logrados en materia de gobernanza por las sociedades africanas. Los datos de los últimos informes del Índice Ibrahim de Gobernanza Africana ya alertaban de una tendencia en la ralentización de los indicadores de gobernanza durante los últimos cinco años, empeorando por primera vez, en casi una década, en el año 2019. Se señalaba que, si bien el continente ha ido avanzando en materia de buena gobernanza, la amenaza del deterioro de la situación de seguridad y la erosión de los espacios de participación cívica y democrático, suponían un riesgo frente a los avances conseguidos.¹ Este fenómeno representa una seria amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad del continente, poniendo en riesgo algunas de las aspiraciones de la agenda africana 2063, *The Africa We Want*, entre ellas la aspiración 3, centrada en la construcción de un África basada en el buen gobierno, la democracia, el respeto por los derechos humanos, la justicia y el imperio de la ley; y la aspiración 4, que tiene como objetivo alcanzar un África pacífica y segura.²

Las razones que ayudan a explicar la eclosión del fenómeno son complejas y multicausales, pero existen

dos elementos que se han observado en los últimos acontecimientos para justificar los mismos por los aparatos militares: el deterioro de la situación de la seguridad y la inestabilidad política. En el caso de Chad, la muerte del presidente Idriss Déby, producida en medio de un clima de grave inestabilidad política y de seguridad, sirvió como pretexto para la toma del control de las instituciones del Estado por parte de una junta militar liderada por su hijo, el general Mahamat Déby, suplantando el orden constitucional. En Guinea, el golpe dirigido por el teniente coronel Mamady Doumbouya que derrocó al Gobierno presidido por Alpha Condé, vino precedido por un cambio inconstitucional para rescindir el límite de mandatos presidenciales, generando un importante descontento popular que fue duramente reprimido por el Gobierno. En Malí, las causas se relacionaron con el deterioro de la situación de seguridad, la crisis en el gobierno de transición y el aumento del descontento popular, todo lo

cual dio origen al segundo golpe en el país en 9 meses por parte del coronel Assimi Goïta. Por su parte, en Sudán las causas también se relacionaron con las tensiones entre la parte civil y la parte militar del Gobierno, que derivó en la usurpación de la transición por la parte militar encabezada por el presidente del Consejo Soberano, el general Abdel Fattah al-Burhan. En estos dos últimos casos, se da la paradoja de

que los golpes de Estado fueron provocados por el ala militar del Gobierno híbrido transicional surgido a partir de otros golpes militares previos, poniendo fin a las transiciones acordadas.

Las respuestas a los mismos, lejos de haber sido unitarias, han mostrado diversos raseros. A nivel interno, si bien en Chad y Sudán los golpes fueron recibidos con desaprobación por sus poblaciones, generándose movilizaciones populares y de la oposición política que desencadenaron en episodios de represión por las fuerzas de seguridad del Estado; en Guinea, Malí y Burkina Faso las nuevas juntas militares contaron con un buen recibimiento y apoyo popular, incluso de partidos políticos opositores. Del mismo modo, también a nivel externo las respuestas de las organizaciones africanas y actores internacionales han empleado raseros dispares. Si bien en los casos de Guinea, Malí, Sudán o Burkina Faso estos organismos coincidieron en su condena unánime, no ocurrió lo mismo con el caso de Chad, en donde la mayoría de los actores de la comunidad internacional se quedaron en un tímido llamamiento al retorno al orden constitucional, sin condenar el golpe. De hecho, el Gobierno francés reconoció sin problemas a la junta militar argumentando motivos de seguridad excepcionales. Por su parte, la Unión Africana (UA)

1. Mo Ibrahim Foundation (2020), *2020 Ibrahim Index of African Governance*.

2. African Union, *Agenda 2063. The african we want*, diciembre de 2021.

acordó suspender del organismo a Malí, Guinea y Sudán, pero no hizo lo propio con Chad. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) suspendió a Malí y Guinea (y recientemente también a Burkina Faso), impuso sanciones a los miembros de la junta militar de Guinea, fue un paso más allá en la dureza de las sanciones económicas decretadas en Malí –a las cuales también se sumó la otra organización regional de la zona, la Unión Monetaria de África Occidental (UEMOA)– pero no impuso sanciones a Burkina Faso. A nivel internacional las sanciones a Malí fueron respaldadas por EEUU, UE o Francia, pero China y Rusia bloquearon una declaración de apoyo a las mismas en el Consejo de Seguridad.

Este doble rasero está siendo utilizado para cuestionar las políticas de sanciones y los intentos de restablecer el orden constitucional por parte de la comunidad internacional como una aproximación neocolonial e interesada no basada en criterios de defensa de la democracia sino por intereses estratégicos, lo que provoca un cuestionamiento general y la deslegitimación hacia los grandes consensos en torno a cómo afrontar las amenazas a la paz y seguridad en las políticas de prevención de conflictos. Asimismo, la imposibilidad de que la comunidad internacional y los actores africanos generen una condena unificada y concreta, así como la existencia

de actores que mantienen relaciones diplomáticas con los gobiernos golpistas y rompen el efecto del aislamiento regional y global, contribuyen a alimentar el efecto contagio de los militares, que se leen impunes.

Por otro lado, las medidas de suspensión de los organismos africanos de algunos de los países golpistas, si bien busca obligar a las juntas militares a compartir el poder con líderes civiles, ha logrado un efecto limitado. De hecho, los golpes de Malí y Sudán, cuyos gobiernos previos al golpe ya provenían de una conformación cívico-militar surgida de golpes anteriores bajo presión internacional, se han vuelto a ver en la misma usurpación de poder por el ala militar del gobierno de transición un tiempo después. En este sentido, quizás la UA y los diferentes organismos africanos deberían revisar su política de legitimación de golpes bajo

el paraguas de creación de gobiernos híbridos, así como impulsar y fortalecer medidas preventivas contra la mala gobernanza para evitar el efecto contagio en el continente, sancionando, no solo los cambios inconstitucionales de gobierno, sino también las vías no democráticas e inconstitucionales de preservación del poder, como los terceros mandatos o los fraudes electorales. De lo contrario, podemos encontrarnos en la antesala de una proliferación de cambios inconstitucionales de consecuencias imprevisibles.

***La UA y otros
organismos africanos
deberían impulsar y
fortalecer medidas
preventivas contra
la mala gobernanza
para evitar el efecto
contagio en el
continente***

5.2. La intervención de Uganda en persecución de las ADF en territorio congolés

A mediados de noviembre el grupo armado congolés Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) cometieron varios atentados en la capital ugandesa, Kampala, lo que supone un salto geográfico y cualitativo de las acciones del grupo. Las acciones armadas de las ADF desencadenaron una respuesta armada de Uganda en territorio congolés, lo que puede implicar una escalada en la evolución y gravedad de este conflicto de graves consecuencias.³ Este operativo ugandés, además, reabre uno de los episodios más graves y mortíferos que ha vivido el continente africano en las últimas décadas, la intervención ugandesa y de otros países de la región, principalmente Ruanda y Burundi, en la conocida como Primera Guerra Mundial Africana (1998-2003), todavía en el recuerdo de la ciudadanía congoleña y de la región de los Grandes Lagos por las graves consecuencias que tuvo en RDC en términos de vidas humanas y que todavía hoy persisten en lo concerniente a la inestabilidad y violencia presente en el este del país.

El 16 de noviembre de 2021 se registraron tres explosiones en la capital ugandesa, Kampala. Las explosiones, cometidas por tres atacantes suicidas, se produjeron cerca del Parlamento nacional y de la sede central de la Policía ugandesa, dejando un balance de siete personas muertas y 40 heridas. Las autoridades ugandesas atribuyeron los ataques a las ADF, reaccionando primero mediante arrestos masivos de posibles sospechosos en el interior del país y, posteriormente, anunciando nuevos planes para volver a desplegar al Ejército ugandés en la vecina RDC. Las ADF reivindicaron las acciones cometidas en Uganda. El 30 de noviembre las Fuerzas Armadas ugandesas informaron de los primeros ataques aéreos contra posiciones de las ADF en suelo congolés, y a principios de diciembre las tropas ugandesas entraron en territorio de la RDC tras un acuerdo con el Gobierno congolés para combatir a la insurgencia, lo que supone el retorno de las Fuerzas Armadas ugandesas a territorio congolés 20 años después.

Las ADF es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congoleños que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). Fue creado a mediados de los años noventa en el oeste de Uganda por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF, Ejército Nacional para la Liberación de Uganda -NALU, por sus siglas en inglés-) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevaleció la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginales en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. Liderado

por Jamil Mukulu, desde finales de los años noventa el grupo había mantenido un bajo perfil en la provincia de Kivu Norte, cerca de la frontera con Uganda, donde diferentes ofensivas militares lo habían prácticamente desarticulado, aunque fue capaz de regenerarse debido a que sus redes de financiación y su capacidad de reclutamiento se mantuvieron intactas. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también Kabila) para presionar a Uganda. El grupo tenía también el respaldo de Kenia y de Sudán, así como poseía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congoleña, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil, pero no fue hasta 2015, con el encarcelamiento de su líder, Jamil Mukulu, y el ascenso de Musa Baluku en su lugar, que experimentó un proceso de radicalización y ampliación de sus actividades. En 2019 las Fuerzas Armadas congoleñas iniciaron una ofensiva contra el grupo que provocó una escalada de la violencia en el norte de la provincia de Kivu Norte con graves consecuencias para la población civil, debido a los impactos de las operaciones de los cuerpos de seguridad, así como por las represalias de las ADF como respuesta a la ofensiva militar. Desde entonces, este clima de violencia y acciones insurgentes ha ido en aumento, en el marco de las cuales se podrían haber cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra según Naciones Unidas.

En el último año, diversos hechos alertaban de la gravedad de la situación y de la creciente militarización del conflicto. Las diversas operaciones perpetradas por las Fuerzas Armadas congoleñas durante los últimos años han infringido importantes pérdidas a las ADF y se dismantelaron varios de sus bastiones. No obstante, el grupo mantuvo su capacidad de causar daños a la población civil, amplió su zona de operaciones y recurrió con mayor frecuencia a los artefactos explosivos improvisados, método de combate que no había sido utilizado por las ADF hasta finales de 2020, fecha a partir de la cual se produjo una escalada del uso de estos artefactos. Además, en agosto de 2021 se produjo otro hecho preocupante por las consecuencias derivadas, ya no solo en términos militares, sino en términos del relato que pueden construir las ADF para legitimar su existencia: el presidente congolés Félix Tshisekedi autorizó que fuerzas especiales estadounidenses dieran apoyo a los cuerpos de seguridad congoleños en sus

3. Véase el resumen de RDC (este-ADF) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

actividades contra el grupo armado, el único de la región incluido en las listas terroristas de EEUU por su vinculación a Estado Islámico (ISIS) y considerado el más letal de las decenas de grupos armados que operan en el este de la RDC. Según el informe del Grupo de expertos de RDC publicado en junio, pese a los intentos de las ADF de proyectar su alineación con el grupo armado ISIS, no se pudo establecer si este les daba apoyo directo o ejercía funciones de mando y control sobre ellas, aunque sí se ha constatado la participación de combatientes extranjeros, que contribuyeron a perfeccionar las técnicas de construcción de artefactos explosivos. No obstante, cabe destacar que ISIS reivindicó tres ataques en la localidad de Komanda en los que las ADF ejecutaron a diversas personas entre septiembre y octubre. Posteriormente, como si de la antesala del ataque ugandés se tratase, del 11 al 12 de noviembre, presuntos combatientes de las ADF perpetraron uno de los ataques más mortíferos en Kivu Norte durante 2021, matando al menos a 38 civiles. En respuesta a la ofensiva ugandesa de finales de noviembre, las ADF intensificaron sus operaciones militares, entre las cuales sobresalió un ataque suicida producido el 25 de diciembre en un restaurante en Beni, que dejó un balance de al menos nueve personas

muertas en lo que se convirtió en el primer ataque suicida registrado en el país.

El operativo ugandés ha generado un clima de preocupación y desconfianza en el este de RDC por la escalada de las actividades militares que ha supuesto; así como por el recuerdo de la presencia ugandesa en la década de los noventa, responsable de crímenes de guerra y contra la humanidad durante la guerra congoleña; y porque el grupo armado ha demostrado tener una importante capacidad de resiliencia a pesar de las importantes ofensivas que ha sufrido. Todo ello lanza numerosos interrogantes en torno a una posible derrota militar del grupo, además de las víctimas civiles que provocará en paralelo. En este sentido esta ofensiva pone nuevamente de manifiesto la apuesta por una estrategia centrada en la securitización de las respuestas internacionales ante las amenazas a la paz y la seguridad internacional, que se está revelando como un fracaso en otros contextos porque no contribuye a reducir los impactos de las actividades de los grupos armados, sino que, a menudo, los incrementa, así como tampoco hace frente a las causas y raíces estructurales que se encuentran en la génesis de este y otros conflictos.

5.3. Escalada de la violencia en Myanmar tras el golpe de Estado

El golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas de Myanmar en febrero de 2021 ha llevado a un enorme deterioro de la situación de seguridad, humanitaria y económica del país, en un contexto de agravamiento de la pandemia, que ha hecho más dramáticas, si cabe, las consecuencias de la acción militar. El riesgo de escalada de la violencia se ha incrementado como consecuencia del golpe de Estado, la represión por parte de las fuerzas de seguridad y del cierre de los espacios de participación política para el conjunto de la sociedad de Myanmar y el surgimiento de una respuesta armada organizada por parte de amplios sectores de la oposición. El 1 de febrero, las Fuerzas Armadas conocidas en el país como Tatmadaw, impidieron la conformación del Parlamento que había resultado de las elecciones celebradas a finales de 2020 y en las que la NLD, partido encabezado por Aung San Suu Kyi, había obtenido una clara mayoría. El golpe de estado supuso la conformación de un nuevo gobierno dirigido por el general Min Aung Hlaing como primer ministro y al mismo tiempo jefe del Consejo de Administración del Estado, es decir, ocupando simultáneamente los puestos de jefe de Estado y de Gobierno. El golpe de estado interrumpía el proceso de transición a la democracia iniciado en 2010 y que había llevado al partido NLD –encabezado por Aung San Suu Kyi, líder de la oposición al régimen militar durante las últimas décadas de la dictadura– a liderar el Gobierno del país desde las elecciones de 2015. La incompleta transición, regida por la Constitución de 2008, llevó a una cohabitación en el poder entre las fuerzas militares y los partidos políticos, que impidió la completa transferencia del poder a un gobierno elegido en las urnas. La fragilidad del proceso y la enorme capacidad de influencia del estamento militar se había reflejado en anteriores crisis, como la sucedida en 2017, con la operación militar que llevó al desplazamiento de más de 700.000 personas rohingya a Bangladesh en medio de acusaciones de genocidio y crímenes contra la humanidad perpetrados por las Fuerzas Armadas, sin que el Gobierno liderado por Aung San Suu Kyi adoptara medidas para poner fin a la masacre y persecución de la población rohingya.

Tras el golpe de Estado de febrero, la violencia en el país fue escalando progresivamente. La respuesta de la sociedad civil a la toma del poder por parte de los militares fue de carácter no violento, mediante manifestaciones, huelgas, caceroladas y diferentes tipos de acciones de resistencia pacífica simbólicas. Las fuerzas de seguridad reprimieron con extrema dureza las protestas sociales, con un enorme despliegue militar que incluyó el establecimiento de bases operativas en escuelas, universidades y hospitales, según señaló

el International Crisis Group.⁴ Las fuerzas militares dispararon contra manifestantes, se llevaron a cabo operaciones de seguridad nocturnas en diferentes ciudades con detenciones masivas, incluyendo también palizas, saqueos y asesinatos aparentemente aleatorios. Uno de los episodios de mayor gravedad tuvo lugar el 27 de marzo, día de las Fuerzas Armadas, cuando 158 civiles desarmados, incluyendo 14 menores, murieron tiroteados en diferentes zonas del país.

La escalada de la represión llevó a que la oposición y amplios sectores de la ciudadanía se organizaran para ofrecer resistencia armada frente a la acción de las fuerzas de seguridad. Así, si en los primeros meses se produjeron los primeros desplazamientos de grupos de opositores a zonas bajo control de diferentes grupos armados étnicos para recibir entrenamiento militar, progresivamente se produjeron acercamientos por parte del Gobierno de Unidad Nacional – NUG, por sus siglas en inglés, establecido tras el golpe de estado por los parlamentarios electos en las elecciones de 2020– hacia los grupos armados étnicos con el objetivo de establecer alianzas militares para fortalecer la oposición al régimen militar.⁵ Además, el NUG anunció la conformación de un brazo militar tratando de agrupar y coordinar a todos los grupos surgidos para dar una respuesta armada al golpe de Estado, People Defence Force (PDF). Paralelamente, el proceso de paz entre los grupos armados que en los años previos se habían adherido al acuerdo nacional de alto el fuego se fue resquebrajando, por la oposición de algunos de estos grupos al golpe de Estado y el reinicio de enfrentamientos armados en muchas zonas del país. Si bien las alianzas entre los grupos armados étnicos y los nuevos grupos surgidos al calor de la oposición al golpe de Estado con el apoyo del NUG son frágiles y en ningún caso representan una coalición unificada de oposición al Gobierno militar, la violencia armada ha ido en aumento en los últimos meses y se corre el riesgo de una escalada aún mayor y estancamiento de la violencia, con efectos catastróficos para el conjunto de la población civil del país.

Las cifras de muertes en el conflicto armado recopiladas por diferentes organizaciones apuntan a al menos 1.500 muertes de civiles como consecuencia de la acción de las fuerzas de seguridad de Myanmar, tanto en la represión de las protestas como en enfrentamientos y operaciones de seguridad y más de 2.000 soldados muertos. Si bien se trata de cifras difíciles de verificar, permiten dimensionar la gravedad de la situación de conflicto en el país. A las muertes, se suman las miles de personas que han resultado heridas por la violencia y detenidas por la acción represiva del régimen militar. Por otra parte, el aumento de los enfrentamientos

4. International Crisis Group, *The Cost of the Coup: Myanmar Edges Toward State Collapse*, International Crisis Group Briefing 167/Asia, 1 de abril de 2021.

5. International Crisis Group, *Myanmar's Coup Shakes Up Its Ethnic conflicts*, Crisis Group Asia Report, N° 319, 12 de enero de 2022.

armados entre insurgencia, PDF y Fuerzas Armadas ha llevado a una creciente invisibilización de las iniciativas de resistencia no violenta por parte de la sociedad civil, que protagonizaron la oposición al régimen militar en las primeras semanas. La sociedad civil ha continuado resistiendo a las consecuencias del golpe militar de forma pacífica, mediante redes de apoyo mutuo y acciones de boicot al régimen, que, sin embargo, han dejado de recibir la atención mediática que tuvieron en el primer momento tras el golpe, dando paso a un protagonismo de la violencia y la acción armada.

El contexto de pandemia y crisis económica contribuyen a agravar el escenario. El golpe de Estado, sumado a la situación sanitaria, han llevado al colapso de la economía del país, dando paso a una crisis humanitaria de enormes proporciones. El aislamiento internacional provocado por el golpe ha derivado en una subida de los precios de los productos esenciales y la pérdida de numerosos

***El golpe de Estado
militar en Myanmar ha
sumido al país en una
crisis política, social y
económica de enormes
proporciones, agravada
por el impacto de la
pandemia***

puestos de trabajo, situando a mucha población en una posición de vulnerabilidad y riesgo de no ver cubiertas sus necesidades más básicas. Además, la pandemia ha golpeado con especial contundencia al país asiático.⁶

Las infecciones se incrementaron con posterioridad al golpe, en un país con infraestructura sanitaria muy precaria.

Así pues, el golpe de estado militar de 2021 ha sumido al país en una crisis política, social y económica de enormes proporciones. Aumenta el riesgo de escalada de la violencia, con el consiguiente impacto en la población civil del país, sin que por el momento se vislumbre la posibilidad de una salida negociada ante la ruptura del proceso de paz y los por el momento infructuosos intentos de ASEAN de presionar al régimen. La comunidad internacional debería redoblar sus esfuerzos de hallar vías diplomáticas de acercamiento a la oposición política y al régimen para impulsar de nuevo un proceso de democratización del país.

6. Transnational Institute, *No One Left Behind? Covid-19 and the Struggle for Peace and Justice in Myanmar*, Myanmar Policy Briefing 25, noviembre de 2021.

5.4. El incremento de la violencia en la región indonesia de Sulawesi

Varios análisis han advertido sobre un reciente incremento de los ataques perpetrados por el grupo armado MIT (siglas en indonesio de Mujahidin Indonesia Timur, Muehidines de Indonesia Oriental) en la provincia de Sulawesi Central, especialmente en la región de Poso. A pesar de que hasta el momento la membresía del MIT es relativamente escasa, su alcance geográfico muy restringido y la envergadura de sus acciones limitada, el reciente resurgimiento en su actividad armada genera preocupación por sus conexiones con ISIS y con otros grupos de inspiración yihadista tanto en Indonesia como en el Sudeste Asiático en general; por la capacidad de reclutamiento que todavía parece tener el grupo y el apoyo social con el que aparentemente cuenta en determinadas áreas; y, muy especialmente, por la posibilidad de que se reanuden las tensiones comunitarias y confesionales en Poso. Esta región ya había sido escenario entre los años 1998 y 2001 de una espiral de violencia de matriz sectaria y comunitaria —en la que más de 1.000 personas murieron (más de 2.000 según algunas fuentes) y casi 90.000 resultaron heridas—, así como de numerosos atentados terroristas y episodios varios de violencia desde entonces. En fechas parecidas, entre 1999 y 2002, en la cercana región de Molucas también se registraron enfrentamientos sectarios entre comunidades musulmanas y cristianas que provocaron la muerte de aproximadamente 5.000 personas y el desplazamiento de cientos de miles de personas.

El incremento de los ataques por parte del MIT desde el año 2020 causó una cierta sorpresa entre analistas sobre la región por cuanto se creía que este estaba prácticamente desarticulado y porque denota una gran capacidad de resiliencia y resistencia del MIT a la presión militar del Estado en la última década. De hecho, un informe del Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) publicado en 2021 afirmaba que actualmente el MIT es la organización terrorista más activa en toda Indonesia.⁷ Tras varios años de operaciones de contrainsurgencia y el despliegue de unos 2.400 policías y soldados de élite en la región de Poso, varios artículos sostienen que en 2016 el MIT estaba prácticamente derrotado y en vías de desaparición. En dicho año, el líder y fundador del grupo, Santoso, fue abatido y decenas de sus combatientes murieron o fueron arrestados. Además, la infiltración de los servicios de inteligencia en las comunidades de la región era muy elevada y la efectividad de los programas de desradicalización impulsados por el Gobierno había desincentivado y disminuido el reclutamiento de organizaciones yihadistas en el conjunto del país.

Por otra parte, en mayo de 2017 varias organizaciones armadas que habían jurado lealtad a ISIS iniciaron el asedio a la ciudad filipina de Marawi (en la isla de

Mindanao) y confrontaron durante cinco meses a las Fuerzas Armadas filipinas, que tuvieron que contar con la ayuda de varios países para recuperar el control de la ciudad, lo cual captó la atención, los recursos y la militancia de grupos armados en la región. Así, por ejemplo, el principal grupo leal a ISIS en Indonesia, Jamaah Anshorud Daulah (JAD), que en los últimos tiempos había canalizado cuantiosa ayuda económica desde Siria al MIT, dirigió sus recursos económicos a la batalla de Marawi y no al sostenimiento del MIT. Del mismo modo, según un informe del Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC),⁸ los nuevos reclutamientos que se produjeron en aquellos momentos tenían mayor interés en desplazarse a Mindanao —la región en el Sudeste Asiático que según ISIS debería ser el epicentro de una nueva provincia (wilayat) del califato islámico— que no en incrementar la membresía del MIT. Sin embargo, el nuevo líder del grupo tras la muerte de Santoso, Ali Kalora, centró sus esfuerzos en reclutar a nuevos combatientes y en reconstruir sus redes y bases de apoyo. Según algunos analistas, para ello se valió de sus conexiones con redes de ulemas locales y de escuelas coránicas (algunas ilegales o clandestinas) y con familias de combatientes presos en Java y Sulawesi. Además, el terremoto que asoló la región de Sulawesi en septiembre de 2018 y que provocó la muerte de, como mínimo, 4.300 personas, creó las condiciones idóneas para reforzar los vínculos entre el grupo y determinadas comunidades y también para incrementar el reclutamiento de personas jóvenes.⁹

Además del incremento en el número de personas reclutadas, algunos análisis¹⁰ señalan que en los últimos tiempos el MIT ha incrementado su capacidad operativa y bélica, su financiación a través de grupos radicales en el extranjero y sus conexiones con organizaciones yihadistas regionales, como el JAD —recientemente varias personas que participaban en un operativo conjunto fueron detenidas— o incluso de fuera del Sudeste Asiático —en 2016, por ejemplo, seis personas uigures murieron en Sulawesi en una operación policial contra el MIT. Cabe señalar también que el MIT fue el primer grupo en Indonesia, en 2014, que juró lealtad a ISIS y que su presencia en medios digitales, muy superior a la de otras organizaciones yihadistas en la región, se asemeja bastante a los mensajes y estrategia mediática y propagandística de ISIS en Siria e Iraq. Del mismo modo, se estima que hasta 700 personas provenientes principalmente de Indonesia y Malasia se enrolaron en las filas de ISIS, formando incluso una unidad propia en la provincia siria de Hasakah conocida como Katibah Nusantara Daulah Islamiyah. En la misma línea, algunas voces señalan que el MIT sigue gozando de un cierto apoyo y simpatía en determinadas partes de la

7. Institute for Policy Analysis of Conflict, *The Decline of ISIS in Indonesia and the Emergence of New Cells*, IPAC Report n°69, 21 de enero de 2021.

8. Institute for Policy Analysis of Conflict, *COVID-19 and the Mujahidin of Eastern Indonesia (MIT)*, IPAC short briefing n°3, 28 de abril de 2020.

9. Alif Satria, *Indonesia: Putting the Sigi Attack in Context*, *BenarNews*, 4 de diciembre de 2020.

10. Uday Bakhshi, *Is the East Indonesia Mujahideen a Threat to Indonesia?*, *The Diplomat*, 18 de julio de 2020.

provincia de Sulawesi Central, como así lo demostraría el hecho de que miles de personas asistieran al funeral del líder del MIT, Ali Kalora, en septiembre de 2021, o que centenares de personas hubieran hecho lo propio en el funeral de dos destacados miembros del MIT el año anterior. Un informe de IPAC señalaba que el incremento de la brutalidad en los ataques perpetrados por el MIT desde 2020, especialmente en relación a la decapitación de civiles acusados de ser informantes del Ejército o la quema de casas, buscaría varios objetivos tácticos, como evitar delaciones al Gobierno; incrementar su publicidad y visibilidad a nivel internacional; demostrar que a día de hoy es la única organización yihadista en Indonesia con una base territorial; o alentar enfrentamientos comunitarios como los que ya habían existido en el pasado en Sulawesi o en la vecina Molucas.

Respecto de esta última cuestión, algunas voces¹¹ han advertido que el MIT y otras organizaciones yihadistas como el JAD podrían sacar provecho de los estereotipos, miedos, incertidumbres, polarización religiosa y fragmentación comunitaria provocadas (y perpetuadas) por el conflicto intercomunitario que se vivió en Poso entre 1998 y 2001 y por los episodios de violencia que se han registrado en dicha zona desde entonces. Aunque la espiral de enfrentamientos comunitarios formalmente llegó a su fin con la firma en diciembre de 2001 de la Declaración de Malino –un acuerdo facilitado por el Gobierno que preveía el desarme de milicias cristianas y musulmanas, el retorno de decenas de miles de personas a sus lugares de origen, la reconstrucción de comunidades e infraestructuras, programas de reconciliación y proyectos de desarrollo socioeconómico–, desde entonces se han registrado algunos atentados y hechos de violencia que han amenazado la convivencia entre las distintas comunidades que habitan en Sulawesi Central. Cabe destacar, a modo de ejemplo, los atentados con explosivos a sendos autobuses en Poso en 2002 y 2004 (en los que murieron 13 personas y 30 resultaron heridas), la masacre de 13 civiles cristianos en 2003 en la misma región, la decapitación de tres niñas en 2005 en Sulawesi Central o el atentado con bomba en un mercado de la localidad de Tentena –en el que 22 personas murieron y unas 90 resultaron heridas– el 28 de mayo de 2005, fecha del quinto aniversario de una masacre en una comunidad musulmana en la que 165 personas murieron en Sulawesi Central. Como ya se ha comentado anteriormente, en la cercana región de Molucas, especialmente en la región de Ambon, también se registraron enfrentamientos comunitarios a gran escala que provocaron la muerte de miles de personas. Tanto en el caso de Ambon como en el de Poso

El reciente incremento de los ataques perpetrados por el grupo armado MIT en la provincia de Sulawesi Central genera preocupación porque en dicha región se han producido importantes brotes de violencia comunitaria en las últimas décadas

el conflicto se produjo en un contexto de inestabilidad política y económica provocadas principalmente por la muerte del dictador Suharto en 1998 y por el impacto de la crisis financiera en todo el Sudeste Asiático.

A pesar de los riesgos que entraña el reciente resurgimiento de la violencia en Sulawesi y la aparente rearticulación del MIT en la región, un informe de IPAC señala que recientemente se ha registrado un importante declive tanto de la actividad de las organizaciones leales a ISIS en Indonesia como del apoyo a ISIS. Algunos de los factores explicativos serían el colapso de ISIS en Siria e Iraq; las dificultades crecientes para viajar a dichos países; el impacto de la pandemia en la movilidad y la financiación de determinados grupos armados; o el incremento de las capacidades antiterroristas del Estado indonesio. Respecto de este último punto, la aprobación

en 2018 de una nueva legislación antiterrorista que autoriza acciones preventivas contra personas sospechosas de perpetrar atentados y el incremento del presupuesto para tareas de vigilancia y contrainsurgencia habría provocado un claro descenso en el número de acciones consideradas terroristas desde el 2018. En este sentido, IPAC señala que la afluencia masiva de personas de origen indonesio a las filas de ISIS en Siria e Iraq no ha comportado un salto cualitativo en la capacidad operativa y bélica de las organizaciones yihadistas en Indonesia y que actualmente el armamento del que disponen dichas organizaciones es muy rudimentario y dependiente de artefactos de fabricación propia, armas

ligeras y blancas. En el caso particular de Sulawesi, la capacidad de las dos principales organizaciones que operan en la región –JAD y MIT– también parece ser relativamente volátil y claramente inferior a la de épocas anteriores. A modo de ejemplo, en marzo de 2021 el JAD perpetró un atentado contra una iglesia en la ciudad de Makassar (provincia de Sulawesi sur) en la que dos personas murieron y otras 22 resultaron heridas. Aún si esta acción fue una de las principales del grupo en la región en los últimos tiempos, su impacto fue claramente inferior al de algunas de sus acciones anteriores, como los atentados en Surabaya en 2018 (58 víctimas mortales) o Sarinah en 2016 (33 víctimas mortales). En cuanto al MIT, a raíz de su incremento en el número y letalidad de sus acciones desde el año 2020 el Gobierno incrementó su presión sobre el grupo, aumentando el número de detenciones. Ante el intento de eludir tal presión, algunos medios señalaron en mayo de 2021 que el MIT se dividió en dos facciones, una liderada por Muhammad Busra, alias Qatar, en Poso y la otra en la región de Sigi liderada por Ali Kalora, que murió en combate en septiembre de 2021. Según algunas fuentes, la muerte de Kalora supone un importante revés para el grupo armado.

11. *Ibid.*

A modo de conclusión, a pesar de que el número de incidentes considerados terroristas se ha reducido notablemente en Indonesia en los últimos años y de que la capacidad operativa de algunas organizaciones yihadistas se ha visto claramente erosionada por el colapso de ISIS en Oriente Medio y por las políticas contrainsurgentes de Yakarta, siguen existiendo decenas de grupos que han jurado lealtad a ISIS y muchos de ellos han demostrado una enorme capacidad resiliencia y de fragmentación y dispersión en pequeñas células o grupúsculos. Además, en el

caso particular de Sulawesi, en el pasado se ha visto que, en contextos de polarización y fragmentación a partir de líneas confesionales, episodios de violencia aislados y sin aparente connotación política o religiosa pueden desatar dinámicas de violencia comunitaria de enormes dimensiones. Como ya sucedió en Ambon y en Poso a finales de los años 90 y principios del siglo XXI, organizaciones armadas foráneas aprovecharon la situación de inestabilidad para inmiscuirse en las dinámicas locales del conflicto con el objetivo de azuzar la violencia y obtener réditos de la situación.

5.5. El incremento de la crisis política en Bosnia y Herzegovina

En 2021 Bosnia y Herzegovina fue escenario de un grave aumento de las tensiones políticas. El boicot serbobosnio a las instituciones del Estado; la decisión del parlamento de la República Srpska de desvincularse de diversos ámbitos estatales, incluyendo el Ejército; y los desacuerdos en torno a la reforma electoral, entre otros elementos, fueron factores de incremento de la tensión y de incerteza sobre su evolución en 2022, un año en el que se cumplen tres décadas del inicio de la guerra y en el que están previstas elecciones generales en octubre. Numerosos actores locales e internacionales, políticos y sociales, advirtieron sobre el deterioro de la crisis política en el país e instaron a la adopción de medidas encaminadas a alcanzar acuerdos políticos y desescalar la situación.

Los acuerdos de paz de Dayton (1995) pusieron fin a la cruenta guerra de 1992-1995 en Bosnia y Herzegovina y dieron paso a una compleja estructura administrativa que combina el reparto de poder político y la preservación de la integridad territorial, en forma de república federal descentralizada con dos entidades (la Federación de Bosnia y Herzegovina, bajo control croata-bosniaco; y la República Srpska). En las décadas de la construcción estatal post-Dayton se han cronificado las desavenencias entre las élites de los tres grupos de población mayoritarios, y entre el liderazgo serbobosnio y los actores internacionales implicados con poderes ejecutivos en la supervisión de los acuerdos de Dayton. La prolongada etapa postbélica ha sido escenario de una prevalente falta de confianza entre los actores políticos de las entidades y de priorización de intereses de las élites por encima del abordaje de necesidades socioeconómicas de la población y de una construcción de memoria histórica compartida. Asimismo, la falta de procesos participativos y una arquitectura internacional de apoyo y seguimiento de la implementación de los acuerdos con pocos espacios de participación social ha ahondado en la desafección de la población. En su conjunto, se han sucedido tensiones políticas y sociales, agudizadas en 2021 de la mano de varios elementos.

Por una parte, en 2021 se incrementó la tensión entre el liderazgo serbobosnio y las instituciones estatales, materializada de diversas formas. Se dio paso a una situación de boicot por los representantes serbobosnios, que incluyó a la presidencia tripartita del país, el Parlamento y el Consejo de ministros. Asimismo, el líder serbobosnio representante en la presidencia tripartita y dirigente del partido Unión de los Socialdemócratas Independientes (SNSD), Milorad Dodik, anunció en octubre una próxima retirada de la república

serbobosnia del Ejército de Bosnia y Herzegovina y de otros órganos vinculados al ámbito de impuestos y judicial de competencias estatales. Si bien en diversas ocasiones en años anteriores Dodik había amenazado con una salida de las instituciones e incluso con la secesión de la entidad, estas advertencias no se habían materializado, consideradas más una medida de presión y propagandística que una posición real. No obstante, en 2021 las advertencias fueron acompañadas, en diciembre, de la aprobación por el Parlamento serbobosnio de un acuerdo no vinculante para el inicio de la retirada de la entidad serbobosnia del Ejército estatal y de los sistemas tributario y judicial y la elaboración de la legislación necesaria para el establecimiento de instituciones paralelas. Se puso así de manifiesto una posición más determinada por parte del liderazgo

serbobosnio de cuestionar y tensionar unilateralmente la actual estructura del país. El alto representante para la implementación del acuerdo de paz había advertido en su informe de noviembre que llevar a la práctica las amenazas supondría una salida del marco establecido por los acuerdos de Dayton. A la crisis se añade el elemento de tensión crónica entre la propia figura del alto representante –que cuenta con poderes ejecutivos– y las autoridades serbobosnias, que la consideran como una injerencia externa.

El incremento de tensión se produjo en un año antesala de las elecciones generales de octubre de 2022. En ese contexto, resultaba incierto anticipar el alcance último de los objetivos del liderazgo serbobosnio, en tanto podrían abarcar desde la instrumentalización de la tensión como vía para fortalecer su propia posición en los procesos políticos y electorales, como en última instancia aspiraciones de separación. No obstante, otros elementos podrían actuar de contrapeso. La propia oposición política serbobosnia se ausentó de la votación de diciembre y se mostró crítica con la decisión, señalando electoralismo y advirtiendo de riesgos de que la retirada anunciada de las instituciones derivase en un conflicto con expresión armada. Actores internacionales también reaccionaron a la crisis de 2021 advirtiendo de posibles sanciones en caso de retirada unilateral. En ese contexto, se intensificó durante el año la actividad diplomática encaminada a la reducción de la tensión. Asimismo, los liderazgos de las tres principales comunidades del país descartaban que pudiera darse un escenario de nuevo conflicto armado.

Otro elemento de tensión continuó siendo la disputa en torno al sistema electoral. En este ámbito, la posición política croata incluye la demanda de potestad de escoger a su propio representante en la presidencia

tripartida del país, ahora compartida con la más numerosa comunidad bosniaca. La posibilidad de un distrito electoral específico en que sean mayoría se ha planteado en diversos momentos como una de las opciones para materializar esa demanda. No obstante, años de disputas en torno a la legislación electoral no han resultado en acuerdos sobre nuevas fórmulas y mecanismos. Se añade el hecho de que el actual sistema discrimina a la población que no forma parte de las tres comunidades principales (bosniaca, croata y serbia). En relación a ello, en el pasado ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos instó a las autoridades a poner fin a la discriminación contra población de comunidades no mayoritarias. En 2021 el Consejo de Europa reiteró ese llamamiento, demandando cambios en la legislación electoral y la Constitución. Los desacuerdos crónicos en torno a la legislación electoral podrían llevar a un escenario de incremento de la disputa política en los meses previos a los comicios de octubre de 2022 o, incluso, a un escenario de boicot electoral que, en combinación con la crisis en torno a la República Srpska agravaría la situación en el conjunto del país.

Por otra parte, otro factor de riesgo fue la mayor internacionalización de elementos de la crisis de Bosnia y Herzegovina. Entre otros, Rusia amenazó en 2021 con vetar la renovación en el Consejo de Seguridad de la ONU la misión de la UE en Bosnia (EUFOR) si se

incluían referencias a la Oficina del Alto Representante. Finalmente la misión fue renovada a finales de año, sin menciones a esta figura. Hubo también en 2021 un intento fallido de resolución de Rusia y China para su eliminación. A su vez, actores internacionales advirtieron de posibles sanciones contra Dokik, mientras Hungría alertó de un posible veto a sanciones de la UE. Además, la grave crisis entre Rusia y Ucrania, y su dimensión de crisis entre Rusia y la OTAN, EEUU y UE pasó a configurar el contexto de las relaciones internacionales en Europa, añadiendo riesgos de que otras tensiones más localizadas del continente –como es el caso de Bosnia y Herzegovina– puedan ser instrumentalizadas por Rusia en el marco de una disputa geoestratégica mayor entre actores internacionales.

En el contexto de crisis en Bosnia y Herzegovina se puso de manifiesto la existencia de riesgos crecientes de disputa política, de consecuencias inciertas, si bien las élites políticas locales descartaron escenarios de conflicto de expresión violenta. En 2022 serán necesarios mayores impulsos a iniciativas de diálogo político encaminadas a la búsqueda de acuerdos amplios en torno a procesos para fortalecer el encaje administrativo de las entidades que conforman el país, con participación de actores políticos y sociales, abordar y transformar desconfianzas y agravios, y promover aproximaciones basadas en los derechos humanos del conjunto de la población.

5.6. Violencia, apartheid, desposesión: el precio de ignorar la ocupación de Palestina

La intensificación de la violencia directa en 2021 en el marco del conflicto palestino-israelí y de la ocupación israelí de Palestina volvió a dirigir temporalmente la atención a una disputa histórica y emblemática, pero crecientemente relegada entre las prioridades de los asuntos internacionales. Ello, a pesar de las declaraciones formales de múltiples actores y de la supuesta implicación internacional de largo aliento en la búsqueda de una solución de dos Estados. La conmemoración en 2021 de los 30 años del conocido como proceso Madrid-Oslo convirtió la efeméride en una oportunidad para reflexionar críticamente sobre las dinámicas puestas en marcha desde entonces y que, en la práctica, han favorecido la ocupación israelí de Palestina y la aplicación de políticas que han consolidado la fragmentación, opresión y desposesión del pueblo palestino. El análisis sobre las consecuencias perjudiciales del proceso de paz por los términos en que fue aplicado, de las graves vulneraciones y discriminaciones que padece la población palestina y de la actual coyuntura del conflicto permiten constatar el coste de continuar ignorando la cuestión palestina y la urgencia de nuevas aproximaciones que favorezcan el fin de la impunidad israelí y un abordaje del conflicto desde una perspectiva comprometida con el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos.

En los últimos años las voces abiertamente críticas con el proceso de Madrid-Oslo se han hecho más visibles y recurrentes, poniendo en entredicho sus mecanismos y que se continúe insistiendo en la fórmula de dos Estados sin hacerse cargo de la realidad sobre el terreno. En 2021, el informe del enviado especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados abordó extensamente la responsabilidad de los actores internacionales en la perpetuación de un marco que se ha demostrado fallido.¹² En el documento, Michael Lynk subraya que uno de los principales problemas del proceso Madrid-Oslo es que permitió a Israel imponer su exigencia de que las negociaciones con los representantes palestinos se desarrollaran al margen de marco de derecho internacional aplicable, incluyendo el derecho internacional humanitario y las propias resoluciones de Naciones Unidas. Este marco normativo no ha sido el referente del proceso y, de esta manera, se ha erosionado la posibilidad real de una solución de dos

Estados, ya que en la práctica se ha ido consagrando la realidad de un solo Estado con derechos desiguales. Las políticas israelíes de anexión progresiva de facto de los territorios palestinos han “esfumado” las posibilidades de una solución de dos Estados, subrayaba en 2021 el ex secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, destacando además que el conflicto no puede ser considerado como una disputa entre iguales que pueda ser abordada a través de negociaciones bilaterales.¹³

La asimetría de poder entre las partes, de hecho, se ha visto acentuada en este proceso, ya que el esquema negociador ha beneficiado a la potencia ocupante. En el marco de los Acuerdos de Oslo, Israel vio reconocido su derecho a existir por la OLP sin un reconocimiento equivalente al derecho de autodeterminación y la creación de un Estado palestino; se externalizaron sus responsabilidades como potencia ocupante a través de la Autoridad Palestina y se ha visto beneficiado por las contribuciones de los donantes internacionales.¹⁴ Los acuerdos de Oslo fragmentaron aún más los territorios palestinos y la falta de un cronograma claro más allá de los cinco años del período interino inicial favorecieron que Israel convirtiera las negociaciones en un proceso permanente, mientras continúa con sus políticas de expansión de asentamientos.¹⁵ Adicionalmente, el principal mediador del proceso, EEUU, ha mantenido su postura de apoyo incondicional a Israel que ha favorecido la ocupación y la falta de rendición de cuentas. La UE no ha utilizado su potencial político y económico para presionar a Israel, ha evitado la confrontación y no se ha desmarcado de las políticas delineadas por EEUU y mantiene una adhesión irrestricta al proceso de Madrid-Oslo, pese a las críticas.¹⁶ Entre los gobiernos del mundo árabe tampoco existe un compromiso firme con la causa palestina, como ha quedado incluso más en evidencia tras los recientes acuerdos bilaterales con Israel.

Las voces críticas con el proceso Madrid-Oslo han subrayado que la sistemática adhesión de los principales actores internacionales a la fórmula de dos Estados ignorando la realidad que existe en el terreno y sin demostrar una voluntad política efectiva de resolver el conflicto ha derivado en una “pantomima diplomática”¹⁷ y en una “ficción de proceso de paz”.¹⁸ International Crisis Group destacaba a finales de 2021 que el discurso de los representantes diplomáticos sobre una

12. Naciones Unidas, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967*, A/76/433, 22 de octubre de 2021.

13. Ban Ki-moon, “US should back a new approach to the Israeli-Palestinian conflict”, *The Financial Times*, 29 de junio de 2021.

14. José Abu Tarbush, *Tres décadas de la Conferencia de paz de Madrid: un marco negociador deficitario*, Memorando no.251/2021, OPEX, Fundación Alternativas, 3 de noviembre de 2021.

15. Inés Abdel Razek, “Thirty Years On: The Ruse of the Middle East Peace Process”, *al-Shabaka*, 31 de octubre de 2021.

16. Véase la nota 12 y Hugh Lovatt, “The end of Oslo: A new European strategy on Israel-Palestine”, *European Council on Foreign Relations*, Policy Brief, 9 de diciembre de 2020.

17. Véase la nota 12.

18. José Abu Tarbush (2021), op.cit.

solución bilateral que es prácticamente inalcanzable en la práctica encubre a Israel para que persista en sus políticas de anexión.¹⁹ Muchas voces palestinas se han mostrado escépticas con el proceso desde un principio y vienen denunciando con contundencia que Israel utiliza el proceso de paz para eludir la rendición de cuentas y profundizar en su dominación sobre la población palestina, como subrayaban recientemente las analistas Inés Abdel Razek y Yara Hawari.²⁰ Los supuestos intentos por “reactivar” el proceso de paz se han vuelto irrelevantes, sobre todo en un escenario en el que los sucesivos gobiernos israelíes solo mantienen una adhesión formal a las negociaciones.²¹ Como destacaba José Abu Tarbush, Israel parece dispuesto a una política de gestión del conflicto de manera indefinida.²² Paralelamente, la mayor parte de la población palestina ha perdido la esperanza de obtener un Estado a través de un proceso de negociaciones. Mientras, la AP –afectada por una creciente falta de legitimidad, descrédito por corrupción, acusaciones de colaboracionismo y el pulso con Hamas– mantiene una estrategia de internacionalización con la que busca compensar la asimetría de poder, con resultados muy limitados. Pese a las recurrentes amenazas de la dirigencia palestina de desvincularse de los acuerdos de Oslo, estos siguen siendo el marco vigente. En este escenario, no contribuye que Fatah y Hamas parecen haberse instalado en la división, que en la práctica favorece el statu quo y el reparto de poder entre ambas formaciones y atenta contra el relevo generacional y la renovación de liderazgos palestinos.²³

En este contexto, crecientes voces vienen exigiendo que se reconozca el fracaso de esta aproximación de la comunidad internacional para abordar la cuestión palestino-israelí en las últimas décadas y subrayando la urgencia de un nuevo enfoque. Esta nueva aproximación resulta más perentoria e ineludible teniendo en cuenta las reiteradas denuncias sobre la realidad de apartheid que vive la población palestina. Numerosas voces palestinas, activistas y organizaciones de la sociedad civil, además de personas expertas de Naciones Unidas,²⁴ vienen denunciando esta situación desde hace años. Más recientemente esta denuncia ha cobrado más notoriedad y visibilidad mediática, después de que entidades de derechos humanos

israelíes –como B’Tselem– y ONG internacionales de referencia como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional denunciaran abiertamente el apartheid contra la población palestina y señalaran a las autoridades israelíes por sus responsabilidades en este crimen. Así, en un extenso informe publicado en mayo de 2021, HRW enfatizaba que, de manera sistemática, las autoridades israelíes han privilegiado a la población judía y discriminado a la población palestina. La organización apunta que, con el objetivo de mantener el control de la población judía sobre el poder, la política y la demografía, las autoridades israelíes han desposeído, confinado, separado forzosamente y subyugado a palestinos y palestinas en virtud de su identidad. El informe añade que algunas asunciones como que la ocupación es temporal, que el “proceso de paz” pondría fin a los abusos israelíes y que la población palestina tiene control sobre sus vidas en Cisjordania y Gaza o que Israel es una democracia igualitaria han oscurecido la realidad: un régimen de dominio israelí profundamente discriminatorio con palestinos y palestinas.²⁵ Meses más tarde, y tras cuatro años de investigaciones, Amnistía Internacional publicó otro informe con un diagnóstico similar, en el que enfatiza que la población palestina es tratada como un grupo racial inferior y privada de derechos sistemáticamente.²⁶

Más allá del contexto de violencia estructural, la relevancia y urgencia de un nuevo enfoque también ha quedado de manifiesto por la actual coyuntura y los hechos y dinámicas observadas en el último año. En 2021 no solo se vivió una importante escalada de violencia directa –que causó los mayores niveles de letalidad en siete años, la inmensa mayoría víctimas palestinas–, sino que también se alertó sobre el progresivo aumento de la violencia de los colonos israelíes con la complicidad de las autoridades. Adicionalmente, el nuevo Gobierno israelí que asumió en 2021 intensificó la persecución y criminalización de reconocidas organizaciones de la sociedad civil palestina y solo parecía dispuesto a ofrecer una especie de “paz económica” para minimizar el conflicto. El conjunto de factores, por tanto, refuerza la necesidad de una nueva aproximación que se haga cargo de la asimetría de poder entre las partes, con un enfoque basado en derechos y que promueva acciones urgentes para dismantelar la ocupación israelí.

Voces críticas destacan que la sistemática adhesión de los principales actores internacionales a la fórmula de dos Estados ignorando la realidad en terreno y sin demostrar una voluntad política efectiva de resolver el conflicto han derivado en una “ficción de proceso de paz”

19. International Crisis Group, “Ten Conflicts to Watch in 2022”, *Foreign Policy*, 29 de diciembre de 2021.

20. Inés Abdel Razek (2021), op. cit y Yara Hawari, “Thirty years of sham ‘peace process’”, *al-Jazeera*, 1 de noviembre de 2021.

21. International Crisis Group, *Beyond Business as Usual in Israel-Palestine*, Middle East Report no.225, ICG - USMEP, 10 de agosto de 2021.

22. José Abu Tarbush (2021), op.cit.

23. Itxaso Dominguez de Olazábal, “Praxis of Palestinian Democracy: The Elections that Never Were and the Events of May 2021”, *IEMed Mediterranean Yearbook*, IEMED, noviembre de 2021.

24. UN Human Rights Office of the High Commissioner, *Israeli annexation of parts of the Palestinian West Bank would break international law – UN experts call on the international community to ensure accountability*, 16 de junio de 2020.

25. Human Rights Watch, *A Threshold Crossed. Israeli Authorities and the Crimes Of Apartheid and Persecution*, HRW, 27 de abril de 2021.

26. Amnistía Internacional, *El apartheid israelí contra la población palestina: un análisis de décadas de opresión y dominación*, 1 de febrero de 2022.